

INE/CG716/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS RESPECTO DE SU OTORRA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JOJUTLA, EL C. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

VISTO, para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

ANTECEDENTES

I. Recepción de la Sentencia dictada en el expediente identificado con clave alfanumérica TEEM/PES/70/2021-3. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el diverso TEEM/MIMA/P3/551/2021, signado por la notificadora adscrita a la ponencia tres del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución número TEEM/PES/70/2021-3, dictada por el referido Tribunal, respecto del procedimiento especial sancionador iniciado en contra del Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos, que en la parte que interesa señala: (Fojas 01 a la 104 del expediente).

“(…)

SEGUNDO. Se declara la **existencia** de las infracciones atribuidas por actos anticipados de campaña y entrega de servicios al electorado en contra del ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

TERCERO. Se declara la **existencia** de la infracción atribuida por Culpa In Vigilando en contra del Partido Político Encuentro Social Morelos

(...)

QUINTO. Infórmese a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de la emisión de la presente resolución.

(...)"

De lo anterior, se desprende que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, toda vez que en la Resolución TEEM/PES/70/2021-3, acreditó la existencia de actos anticipados de campaña y la entrega de servicios al electorado consistente en servicios de sanitización en espacios públicos en la colonia del Bosque y en una iglesia, así como por no reportar diversos gastos por concepto renta de un inmueble, gorras y renta de sillas, por parte del Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Morelos.

II. Inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente respectivo con el número de clave **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**, registrarlo en el libro de gobierno, dar trámite y sustanciar el procedimiento oficioso, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, publicar el acuerdo y cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos señalados como probable responsables (Foja 105 del expediente).

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso.

a) El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas de la 108 a la 109 del expediente).

b) El siete de octubre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 110 a la 111 del expediente).

IV. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/43390/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso identificado como **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**. (Fojas 112 a la 115 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/43391/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso identificado como **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**. (Fojas 116 a la 120 del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso y emplazamiento al C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos.

a) El cinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/43400/2021, a través del Sistema Integral de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 121 a la 131 del expediente).

b) A la fecha del presente no ha dado respuesta al emplazamiento.

VII. Notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso y emplazamiento al Responsable de Finanzas del Partido Encuentro Social Morelos.

a) El cinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/43399/2021, a través del Sistema Integral de

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante de finanzas del Partido Encuentro Social Morelos, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 132 a la 142 del expediente).

b) A la fecha del presente no ha dado respuesta al emplazamiento.

VIII. Solicitud de información y documentación a la Secretaría General del Tribunal Electoral del estado de Morelos.

a) El ocho de octubre del año dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/43671/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Secretaría General del Tribunal Electoral del estado de Morelos, con el fin de que proporcionara a esta autoridad copia simple o certificada de las constancias que integran el expediente TEEM/PES/70/2021-3. (Fojas 143 a la 146 del expediente).

b) El once de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave alfanumérica TEEM/MIMA/P3/563/2021, se dio respuesta al requerimiento de información remitiendo a esta autoridad copia certificada de todas las constancias que integran el expediente TEMM/PES/70/2021-3. (Fojas 147 a la foja 1151 del expediente).

IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).

a) El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/1764/2021, se solicitó a Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, que informara si dentro de la contabilidad del denunciado se localiza información respecto del reporte de algún servicio de sanitización adquirido por el sujeto obligado. (Fojas 1152 a la 1156 del expediente).

b) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2926/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de información realizado informando que no se localizó registro alguno del concepto solicitado dentro de la contabilidad del C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos. (Fojas 1157 a la 1159 del expediente).

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

c) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/079/2022, se realizó lo conducente a efecto de solicitar a la Dirección de Auditoría la matriz de precios por concepto de un servicio de sanitización de espacios públicos en la colonia del Bosque y en una iglesia en la localidad de Jojutla Morelos. (Fojas 1160 a la 1165 del expediente).

d) El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/317/2022, la Dirección de Auditoría, atendió el requerimiento que le fue formulado e indicó el precio más alto conforme a la matriz de precio aplicable respecto del servicio de sanitización. (Fojas 1166 a la 1168 del expediente).

e) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/386/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría que proporcionara el valor más alto de la matriz de precios por conceptos denunciados. (Foja 1169 a la 1174 del expediente).

f) El uno de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/0630/2022, la Dirección de Auditoría, atendió el requerimiento que le fue formulado e indicó el precio más alto conforme a la matriz de precio aplicable respecto a los conceptos solicitados. (Fojas 1294 a la 1296 del expediente).

X. Solicitud de Información al C. Israel Zambrano Hernández, Representante Propietario del Partido Renovación Política Morelense.

a) El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante acuerdo el Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, notificar el requerimiento de información al C. Israel Zambrano Hernández, Representante Propietario del Partido Renovación Política Morelense, con la finalidad de que informara el número de servicios de sanitización otorgados por el denunciante, así como el nombre de la empresa que fue contratada para proporcionar el servicio de sanitización. (Fojas 1175 a la 1182 del expediente).

b) El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1962/2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, notificó a través de estrados que ocupa las instalaciones de la Junta Local, toda vez que mediante acta circunstanciada número AC0203/INE-JLE-UTF-MOR/2021, no se encontró a nadie en el domicilio a notificar. (Fojas 1183 a la 1192 del expediente).

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

c) El seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/4862/2021, se realizó lo conducente a efecto de notificar a la parte quejosa el requerimiento de información en la dirección de correo electrónico señalado en su escrito de queja, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, es preciso señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta al respecto. (Fojas 1193 a la 1195 del expediente).

XI. Ampliación del plazo de sustanciación. El dos de enero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo de sustanciación del expediente **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. (Foja 1197 del expediente).

XII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación al Secretario del Instituto Nacional Electoral. El dos de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la ampliación del plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Fojas 1198 a la 1201 del expediente).

XIII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dos de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/004/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización la ampliación del plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 1202 a la 1204 del expediente).

XIV. Requerimiento de información y documentación al Representante Propietario del partido Encuentro Social Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de Morelos.

a) El seis de enero de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, a efecto de que informara si la agrupación denominada “Jóvenes en Encuentro” es una organización adherente al partido político, asimismo, que indicara el objetivo en específico de la agrupación que desarrolla con la comunidad. (Fojas de la 1205 a la 1206 del expediente).

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

b) El once de enero de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/VE/JLE/MORL/0011/2022, realizó lo conducente a efecto de notificar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, el requerimiento de información formulado por esta autoridad, lo anterior, fue notificado en los estrados que ocupan las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos. (Fojas de la 1207 a la 1226 del expediente).

c) El seis de abril de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos. (Fojas de la 1229 a la 1234 del expediente).

d) El ocho de abril de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/VE/JLE/MORL/0581/2022, realizó lo conducente a efecto de notificar de nueva cuenta al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, el requerimiento de información anteriormente solicitado. (Fojas de la 1235 a la 1249 del expediente).

e) El dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante escrito sin número y signado por el Lic. Ernesto Guerra Mota, en su calidad de Representante del Partido Encuentro Social Morelos, da respuesta el requerimiento de información formulado manifestado que el partido que representa no tiene ningún vínculo con la agrupación denominada “Jóvenes en Encuentro”. (Fojas de la 1250 a la 1257 del expediente).

f) El doce de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, con la finalidad de que informara el nombre de la persona que está a cargo de la Coordinación de Movimientos Sectoriales de dicho instituto político, si el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, proporcionó la entrega de servicios de sanitización en espacios públicos y en una iglesia y, por último, si fue participe en las actividades de campaña del sujeto incoado. (Fojas de la 1258 a la 1263 del expediente).

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

g) El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/VE/JLE/MORL/0722/2022, realizó lo conducente a efecto de notificar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, el requerimiento de información formulado por esta autoridad. (Fojas de la 1297 a la 1312 del expediente).

h) El diecinueve de mayo de dos mil veintidós el Representante del Partido Encuentro Social Morelos dio respuesta a la solicitud de información, indicando que de los archivos que obran en su poder, no existe el registro de alguna actividad llevada a cabo en la fecha solicitada, asimismo, indicó que el movimiento sectorial no fue participe en las actividades de campaña realizadas por el sujeto incoado. (Fojas de la 1264 a la 1269 del expediente).

XV.-Ampliación del objeto de investigación.

a) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad, acordó la ampliación del objeto de investigación con la finalidad que todas las constancias que obran en autos sean analizadas, ordenando notificar y emplazar a los denunciados. (Fojas de la 1270 a la 1272 del expediente).

XVI. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto de investigación.

a) El veinte de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación del objeto de estudio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1275 del expediente).

b) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 1277 del expediente).

XVII. Notificación ampliación del objeto de estudio a los denunciados.

a) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar y emplazar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos, y a su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, el C. José de Jesús Pedroza Bautista. (Fojas de la 1279 a la 1281 del expediente).

b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/0754/2022, realizó lo conducente a efecto de notificar y emplazar al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, respecto de la ampliación del objeto del estudio, corriéndole traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito. (Fojas de la 1313 a la 1330 del expediente).

c) El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio sin número, signado por el C. Ernesto Guerra Mota, en su calidad de representante del Partido Encuentro Social Morelos, ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de procesos Electorales y de participación Ciudadana, dio respuesta al emplazamiento realizado por la ampliación del objeto de estudio del expediente de mérito.

“(…)

*Que por medio del presente escrito y anexo que lo acompaña, vengo a dar formal contentación al requerimiento suscrito por la Vocal ejecutiva de la junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, Maestra Liliana Díaz de León Zapata, mediante el cual solicita se informe las circunstancias de la **supuesta asistencia y participación en los eventos llevados a cabo los días veintitrés y veintiséis de marzo de dos mil veintiuno (sanitización en las calles y espacios públicos) veintisiete de marzo de dos mil veintiuno (mantenimiento a la capilla), veintiuno de marzo de dos mil veintiuno (limpieza de iglesia), veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (reunión) veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (reunión) veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (reunión), todos en la comunidad de Jojutla, Morelos, por lo anterior me permito manifestar a esta autoridad que: el partido que represento, según informes de la Coordinación de Administración y Finanzas, no se realizó ni destino recurso alguno para realizar las actividades a que refiere en su escrito, tal y como se acredita en la Balanza de comprobación que obra en poder de esa autoridad y misma que adjunto al presente para mayor claridad, de los meses de febrero y marzo del año dos mil veintiuno..***

(...)"

d) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/0755/2022, realizó lo conducente a efecto de notificar y emplazar al otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, respecto de la ampliación del objeto del estudio, corriéndole traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito. (Fojas de la 1330 a la 1346 del expediente).

e) A la fecha de la presente Resolución, el otrora candidato a la Presidencia Municipal no ha dado respuesta al emplazamiento de mérito.

XVIII. Razones y constancias.

a) El diez de febrero de dos mil veintidós, mediante razón y constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de este instituto lo relativo al "Ordinario" a efecto de saber si dentro del registro de su contabilidad ordinario del ejercicio fiscal del año 2021, se localiza registro alguno respecto a gastos consistentes en sanitización no habiendo registro alguno. (Fojas 1227 a la 1228 del expediente).

b) El veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante razón y constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de verificar si en la contabilidad de campaña del otrora candidato, se localiza registro alguno respecto a gastos consistentes en renta de sillas, gorras con propaganda electoral, y servicio sanitización. (Fojas 1282 a la 1284 del expediente).

c) El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante razón y constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto lo relativo al reporte de la casa de campaña del denunciado con el objetivo de conocer ubicación, contrato y muestras fotográficas del inmueble. (Fojas 1285 a la 1288 del expediente).

XIX. Acuerdo de Alegatos.

Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR. (Fojas 1289 a la 1290 del expediente).

Notificación al C. José de Jesús Pedroza Bautista, en su calidad de otrora candidato a la presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos.

a) El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar de la apertura del periodo de alegatos al otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, el C. José de Jesús Pedroza Bautista. (Fojas de la 1291 a la 1293 del expediente).

b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/0776/2022, notificó al probable responsable, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador oficioso con número de expediente **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**

c) Con fecha dos de junio de dos mil veintidós, se recibió el escrito sin número, mediante el cual, el otrora candidato dio respuesta a la notificación de Alegatos, reiterando lo anteriormente expuesto. (Fojas 1347 a la 1348 del expediente).

Notificación al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

a) El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo necesario a efecto de notificar de la apertura del periodo de alegatos al Representante Propietario del Partido Encuentro Social Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

b) El uno de junio de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE/JLE/MOR/VE/0775/2022, notificó al probable responsable, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador oficioso con número de expediente **INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR**

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

c) Con fecha tres de junio de dos mil veintidós, se recibió el escrito sin número, mediante el cual, el partido dio contestación a la notificación de Alegatos, reiterando lo anteriormente expuesto.

XX. Cierre de instrucción. El siete de octubre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Una vez concluida la etapa de instrucción del presente procedimiento, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, de la siguiente manera:

- En lo general: por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
- En lo particular por cuanto hace a la matriz de precios utilizada para determinar el monto involucrado: de los integrantes presente por tres votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente, Mtro. Jaime Rivera Velázquez; y uno en contra de la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de fondo.

2.1 Objeto de investigación.

Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el sujeto obligado inobservó las obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes:

CONDUCTA	MARCO NORMATIVO APLICABLE
Egreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Egreso no vinculado con la obtención del voto	Artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

SUJETOS OBLIGADOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN:	
Nombre:	José de Jesús Pedroza Bautista
Cargo contenido:	Presidencia Municipal
Municipio:	Jojutla.
Entidad federativa:	Morelos.
Partido postulante:	Partido Encuentro Social Morelos.

Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, realizó gastos que no se vinculan con la obtención del voto por la entrega de servicios de sanitización en espacios públicos en la colonia del Bosque y en una iglesia, así como por no reportar diversos gastos por concepto de gorras, renta de sillas y el gasto por concepto de casa de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que se encuentra compelido el probable responsable, actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

2.2 Consideraciones preliminares.

Con antelación al estudio de las conductas sujetas a análisis por parte de esta autoridad electoral nacional, es de imperiosa necesidad establecer en el caso que nos ocupa, que se tienen por acreditadas las conductas toda vez que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, al resolver el procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEEM/PES/70/2021-3, determinó que las personas incoadas realizaron actos anticipados de campaña por tres reuniones los días 26 de febrero, 27 y 29 de marzo todos de dos mil veintiuno, en las que, de las fotografías certificadas por dicha autoridad, se advierte que el 27 y 29 de marzo existió propaganda electoral a favor del denunciado, consistente en gorras, renta de sillas y el gasto por concepto de casa de campaña, así como por la entrega del servicio de sanitización en la vía pública y en una iglesia, teniendo como resultado que se hicieran acreedores a una sanción consistente en una amonestación pública.

Es preciso mencionar que, con relación a la reunión llevada a cabo el 26 de febrero de dos mil veintiuno, a los trabajos en la iglesia de San Juan Bautista y el mantenimiento de una capilla, los días 21 y 26 de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, si bien es cierto que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó la existencia de actos anticipados de campaña, del análisis a las constancias que integran el expediente, así como las certificaciones de los links realizadas por oficialía electoral del Tribunal Electoral Local, no se advierte ningún tipo de propaganda de campaña a favor de los sujetos incoados, pues no se alcanza a ver dentro de las imágenes, los colores, emblemas, nombres, ni ningún concepto

que pudiera generar un gasto susceptible de ser reportado y por ende fiscalizado por esta autoridad. Aunado a que, en el análisis a los servicios entregados por parte de los sujetos incoados, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó que el único servicio que se acreditó que haya sido entregado es el de servicio de sanitización en las calles de la colonia del bosque y en una iglesia.

A continuación, se inserta la parte conducente de la multicitada determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos:

“(...)

Actos anticipados de campaña

(...)

En ese sentido, es posible determinar que las actividades que se promocionan en los enlaces difundidos en la red social del denunciado, tienen relación con la candidatura del mismo, siendo el caso, que como se ha señalado el mismo contendió el día seis de junio por la presidencia municipal de Jojutla, Morelos, por lo que de las publicaciones se acredita que el denunciado realizó la publicación de:

1. Tres reuniones difundidas los días veintiséis de febrero;
veintisiete y veintinueve de marzo.
2. Realización de **trabajos** (de acuerdo a las imágenes de limpieza y pintura) en la iglesia de San Juan Bautista de Pachimalco, difundidos el día veintiuno de marzo.
3. **Servicios de sanitización** en calles de la colonia del bosque (esto derivado del video proporcionado)¹⁰⁰ y en diverso inmueble que aparentemente es conocida como iglesia(de acuerdo a las imágenes contenidas en el video), difundidos el día veintiocho de marzo.
4. **Labores de mantenimiento** en la capilla de la Colonia del Bosque, difundidas el día veintisiete de marzo.
5. **Sanitización en calles** difundidas el día veintiséis de marzo.

(...)

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Es importante, precisar que, dentro del contexto, el ciudadano denunciado tuvo el carácter de candidato a la presidencia municipal de Jojutla, Morelos, por el partido político Encuentro Social Morelos, por lo que se determina que las publicaciones materia del presente procedimiento se difundieron con la intención de generar un posicionamiento del denunciado, entre el electorado.

Por tanto, atendiendo los elementos para la acreditación de **actos anticipados de campaña** se obtiene lo siguiente:

(...)

Entrega de bienes al electorado en contravención a los artículos 209, numeral 5 de la LGIPE y 39, fracción VIII del Código Electoral Local.

En términos de los artículos citados se encuentra prohibido que los candidatos realicen la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o indirecto,

(...)

Por lo que, esta autoridad jurisdiccional considera que no existe evidencia de que durante los trabajos que se observan en las imágenes se haya realizado la entrega de cubetas de pintura y utensilios de reparación, ni mucho menos que genere un indicio al no estar robustecido tal acto con otros elementos que obren dentro del expediente.

De igual forma no se acredita la entrega de playeras, derivado de la respuesta al requerimiento formulado por la autoridad instructora al Instituto Nacional Electoral, a través del cual informa en el oficio INE/UTF/DA/40018/2021, que, de una búsqueda exhaustiva en las contabilidades de precampaña y campaña, y se verificó que no se registraron gastos, compras, aportaciones o donaciones respecto a los utilitarios descritos como playeras de colores amarillos y azules, sin que pase desapercibido que en los enlaces 7 y 8 se observa la entrega de una playera azul y una amarilla, empero, no obra algún otro elemento en el expediente relacionado que genere convicción para su acreditación.

(...)

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

De lo anterior se advierte que, están plenamente acreditados en el expediente, los siguientes hechos en el procedimiento especial sancionador:

- ✓ Se llevó a cabo entrega de servicios de sanitización en calles de la colonia del bosque (esto derivado del video proporcionado)¹⁰⁶ y en diverso inmueble que aparentemente es conocida como iglesia.

(...)

SEGUNDO. Se declara la **existencia** de las infracciones atribuidas por actos anticipados de campaña y entrega de servicios al electorado en contra del ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista.

TERCERO. Se declara la **existencia** de la infracción atribuida por Culpa In Vigilando en contra del Partido Político Encuentro Social Morelos

(...)"

En virtud de ello, esta autoridad electoral nacional tiene por acreditada la realización de las conductas controvertidas por parte de los probables responsables, y bajo esa tesitura versará el análisis correspondiente, a fin de determinar, en su caso, la configuración de una presunta violación a la normativa en materia de fiscalización.

2.3 Acreditación de los hechos.

A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.

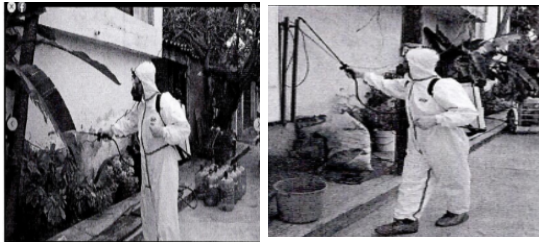
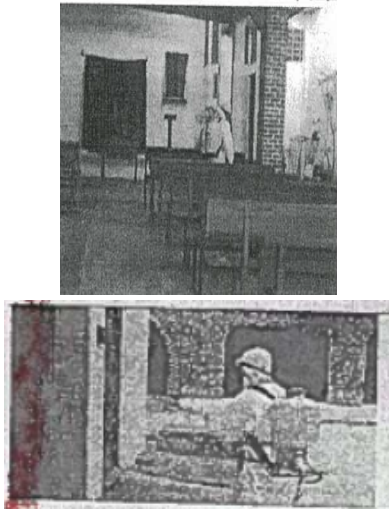

a. Elementos de prueba recabados con motivo de la vista formulada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Documental pública.


Consistente en la copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dentro del procedimiento especial sancionador TEEM/PES/70/2021-3, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

De la citada determinación, se desprenden las imágenes correspondientes al servicio de sanitización de espacios públicos en la Colonia del Bosque y en una iglesia en el municipio de Jojutla, estado de Morelos, así como de dos reuniones de las cuales se desprende la existencia el uso de un inmueble que en su interior se observa el logo del partido incoado, así como el nombre del otrora candidato, gorras con propaganda a favor del partido político y la renta de sillas, como a continuación se detalla:

TEMPORALIDAD	CONCEPTO	EVIDENCIAS
26 de marzo 2021.	Servicio de Sanitización en la Colonia del Bosque, municipio de Jojutla, estado de Morelos.	
28 de marzo de 2021	Sanitización iglesia	
27 de marzo de 2021	Reunión (casa de campaña y renta de sillas)	

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

TEMPORALIDAD	CONCEPTO	EVIDENCIAS
29 de marzo de 2021	Reunión (gorras)	

b. Elementos de prueba recabados por la autoridad.

Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son los siguientes:

Documental Pública.

I. Informe rendido por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones y Otros.

La Dirección de Auditoría, informó que el C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos, no registró en su contabilidad ningún servicio de sanitización de espacios públicos, gorras y renta de sillas materia del procedimiento administrativo de mérito. De igual forma, indicó el precio más alto conforme a la matriz de precios aplicable respecto a los conceptos anteriormente enunciados.

II. Razón y constancias. En dicha documental pública se hizo constar lo siguiente:

De la revisión de la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, en específico en la contabilidad del sujeto incoado, no se localizó el registro contable por los conceptos consistentes en renta de sillas, gorras con propaganda electoral, el servicio de sanitización en espacios públicos, mientras que por cuanto hace al registro contable por concepto del inmueble utilizado en el evento del veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, se constató el reporte que contiene las mismas características del inmueble utilizado como casa de campaña

c. Valoración de las pruebas y conclusiones

Reglas de valoración

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados.

Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor **probatorio pleno**, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.



Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.

Hechos probados

I. Conceptos denunciados que no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Ahora bien, derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, así como la indagatoria realizada en la contabilidad cargada en el Sistema Integral de Fiscalización, se constató la **inexistencia** del reporte de los siguientes gastos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización:



CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Propaganda electoral	EVIDENCIAS
Renta de sillas	
Gorras con propaganda del partido político incoado y renta de sillas	

II. Concepto que fue localizado en el Sistema Integral de Fiscalización

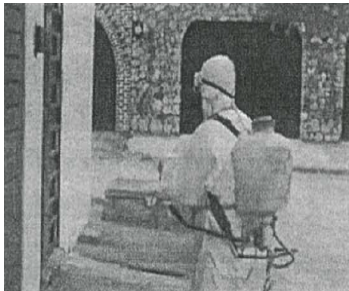

De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, se acreditó la **existencia** del reporte en la contabilidad del sujeto obligado, el inmueble utilizado en la reunión que se llevó a cabo el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, que fue utilizado y reportado como casa de campaña, tal y como se muestra a continuación:

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Evidencias certificadas por el Tribunal Electoral de Morelos	Póliza del registro en SIF	Evidencia del SIF.
	Póliza de Ingresos número 7, del periodo normal	

III. Conceptos que fueron entregados a la ciudadanía y no están vinculados con la obtención del voto.

Ahora bien, derivado de la vista realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se constató la **existencia** de lo siguiente:

CONCEPTO	EVIDENCIAS
Sanitización de calles de colonia del bosque y de una iglesia	 

De lo anterior, esta autoridad electoral concluye lo siguiente:

- Que el Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, C. José de Jesús

Pedroza Bautista no registró en su contabilidad los conceptos consistentes en gorras con propaganda del partido citado, así como la renta de sillas.

- Que el inmueble en donde se llevó a cabo la reunión del veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, se trata de la casa de campaña del denunciado y se encuentra reportada dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
- Que se tiene por acreditado que los sujetos incoados brindaron el servicio de sanitización en las calles de la colonia el bosque y en una iglesia.
- Que dichos hechos no se vinculan con la obtención del voto.
- Que los conceptos que se tienen por acreditados no fueron materia de pronunciamiento en el dictamen consolidado correspondiente.

2.4. Estudio relativo al egreso no reportado.

A. Marco normativo

La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“(…)

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes

“(…)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

“(…)

Reglamento de Fiscalización

“(…)

Artículo 127.

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*
- 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*
- 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.*

(…)”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

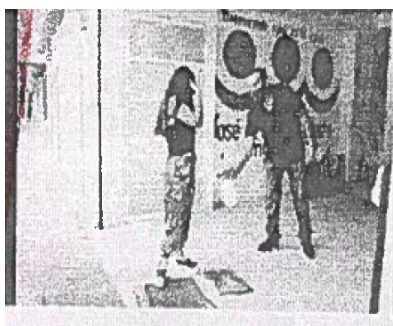
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

B. Caso particular.

Ahora bien, una vez identificados por parte de esta autoridad los conceptos que emanan de la sustanciación del expediente TEEM/PES/70/2021-3, se puede advertir la existencia de egresos relacionados con la renta de sillas y gorras con propaganda electoral, y la renta de un inmueble de casa de campaña en donde se realizaron diversas reuniones.

Por lo cual esta autoridad realizó una búsqueda de la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, de forma específica en la contabilidad del C. José de Jesús Pedroza Bautista, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos, con el objetivo de localizar en dichos registros los conceptos de mérito.

Con relación al inmueble utilizado para llevar a cabo la reunión del veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, de las fotografías se advierte el emblema del Partido Encuentro Social Morelos y el nombre del otrora candidato José de Jesús Pedroza Bautista, y de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización se constató que se trataba del inmueble utilizado como casa de campaña y se encuentra debidamente reportado dentro de la contabilidad del otrora candidato incoado en la póliza número 7, normal, la cual contiene muestras fotográficas coincidentes con las del inmueble materia del presente asunto.



Fotografía del acta certificada



Muestra del SIF

De este modo, y como quedó demostrado previamente en el apartado de *Hechos probados*, se acreditó que el Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, no registró en su contabilidad el gasto por concepto de gorras y renta de sillas.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que se tiene certeza de la existencia de un inmueble con propaganda a favor de los sujetos incoados, el cual es coincidente con el reporte por el gasto del inmueble utilizado como casa de campaña dentro del SIF.

En consecuencia, este Consejo General concluye que en el presente caso, que el Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos, reportó el **inmueble utilizado como casa de campaña** cumpliendo con la normatividad en la materia, por lo tanto, se declara **infundado**, al encontrarse el reporte correspondiente y por ende no haber incurrido en ninguna irregularidad en materia de fiscalización.

Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos de renta de sillas y gorras con propaganda electoral, no se localizó registro alguno dentro de la contabilidad del denunciado, concluyendo con ello que no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización por parte de los sujetos incoados, lo cual quedo debidamente asentado en la razón y constancia levantada por esta autoridad.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que se tiene certeza de la existencia de gorras con propaganda de los sujetos denunciados y de la renta de sillas en los eventos de fecha 27 y 29 de marzo, los cuales fueron acreditados como actos anticipados de campaña.
- Que el Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, no realizó registro de los egresos por concepto de renta de sillas y gorras con propaganda electoral.

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad electoral tiene certeza que el sujeto obligado omitió reportar en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos consistentes en gorras con propaganda electoral y la renta de sillas, mientras que por cuanto hace al inmueble con propaganda de los sujetos incoados se encuentra debidamente reportado y del evento del veintiséis de febrero no se advierte propaganda electoral que deba ser fiscalizada por esta autoridad.

En consecuencia, este Consejo General concluye que en el presente caso, que el Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos, no reportaron los egresos por concepto de gorras y sillas, incumpliendo con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, se considera declarar **fundado**, el presente apartado del procedimiento sancionador administrativo de queja en materia de fiscalización, por cuanto hace a los conceptos por **gorras y sillas**.

Determinación del monto involucrado

Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los términos siguientes:

- a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*
- b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.*
- c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.*
- d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.*
- e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.*

En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie por *gorras y renta de sillas*, tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades del tipo *gastos no reportados*.

En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece que *de manera única* para la valuación de los **gastos no reportados**, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá utilizar el **valor más alto** de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico no reportado.

En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no reportados por el sujeto obligado, se han sostenido criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el costo valor de dichos bienes y servicio, se podrá obtener de la información de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que por sí solo resulta insuficiente para determinar un valor o costo, toda vez que es necesario allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo razonable atendiendo a la **zona geográfica o económica** del bien o servicio prestado al partido político o candidato en particular:

Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría la matriz de precios más altos del concepto no detectado, obteniendo como costo lo que a continuación se transcribe.

ID MATRIZ DE PRECIOS	CONCEPTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL A CUANTIFICAR
54132	Gorras con propaganda	3	Gorra con emblema del partido denunciado	\$27.84	\$83.52
104079	Renta de sillas	42	Renta de sillas para la realización de reuniones	\$62.09	\$2,607.78
Total					\$2,691.30

Es así, que por lo argumentos previamente expuestos nos arroja como resultado por concepto de monto involucrado, el ascendente a **\$2,691.30 (dos mil**

seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.), cantidad que será elemento central al valorar en la imposición de la sanción correspondiente.

2.5 Estudio relativo al egreso no reportado y no vinculado con la obtención del voto.

A. Marco normativo

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que se transcriben a continuación:

Ley General de Partido Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(...)

Artículo 76.

(...)

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales

(...)

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes

(...)

b) Informes de Campaña:

1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)

Reglamento de Fiscalización

“(...)

Artículo 127.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

(...)”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Asimismo, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de destinar y hacer uso de los recursos, que le hayan sido entregados para los fines que le dieron origen a los mismos, es decir, como es de conocimiento público los partidos políticos tienen la obligación de destinar parte de sus recursos para actividades específicas, atendiendo ese principio por ningún motivo pueden dejar de destinar parte de sus recursos para dichas actividades como lo son ; capacitación, investigación socioeconómica y política, etc.

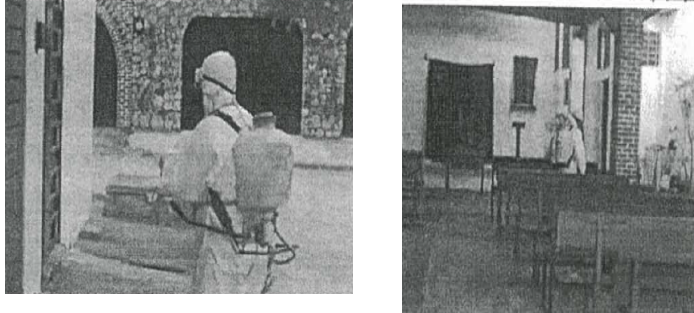
De tal manera con esto se permite el desarrollo de las actividades tendientes de los recursos destinados, sin olvidar que parte de este financiamiento debe ser destinado para actividades tendientes a la campaña electoral, como difusión de su imagen a través de propaganda electoral, realización de eventos y reuniones, etc; sin pasar por alto que dichos gastos deberán ser fiscalizados por esta autoridad.

Sin embargo, el uso de los recursos por parte de los entes políticos, para un fin distinto a el apoyo para la obtención del voto, es una práctica contraria a la normatividad electoral, ya que este vulnera de forma directa el principio de legalidad que debe imperar en todas las contiendas electorales lo cual busca una igual de situaciones para todos los partícipes de la elección ya sea en ámbito Local o Federal.

B. Caso particular.

Como quedó demostrado previamente en el apartado de *Hechos probados*, se acreditó que el Partido Encuentro Social Morelos, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, llevó a cabo el servicio de sanitización en espacios públicos y en una iglesia, como se establece en la tabla siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

CONCEPTO	EVIDENCIAS
Sanitización de calles de colonia del bosque y de una iglesia	

En virtud de lo anterior se advirtió que los servicios ofertados no fueron reportados en la contabilidad del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización, aunado a que no guardan relación con la obtención del voto, y al ser una conducta diversa a la inicialmente investigada, la cual vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso n); y 76, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos, se amplió el objeto de investigación, emplazando debidamente a los sujetos incoados con el fin de respetar su garantía de audiencia, corriéndole traslado de todas las constancias que integran el expediente.

Lo anterior es así, toda vez que en términos del numeral 6 del artículo 34 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual establece que, si con motivo de la sustanciación se advierte la existencia de elementos de prueba o indicios sobre conductas diversas a las inicialmente investigadas, la Unidad Técnica podrá ampliar el objeto de investigación.

Cabe destacar que la entrega del servicio de sanitización en espacios públicos fue acreditada en la resolución multicitada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en la cual se declararon como existentes los hechos denunciados consistentes en la presión al electorado para la obtención del voto, por la entrega del servicio. Cabe destacar que el sujeto incoado manifestó que dicho servicio fue llevado a cabo por una agrupación que era ajena a él, sin embargo, la agrupación denominada Movimiento “Encuentro de Jóvenes” forma parte del Partido Encuentro Social Morelos, según la respuesta brindada por el representante propietario del mentado partido político, razón por la cual el servicio brindado se considera que fue erogado por el propio instituto político, al formar parte de él la agrupación en comento, sin embargo no fue reportada.

Ahora bien, es menester precisar las características de los egresos permitidos por la normativa electoral a las personas obligadas en materia de fiscalización, los cuales deben tener como fin único la obtención del voto, deben ser actos que estén estrechamente vinculados con el llamado al voto, a través de la difusión de las propuestas políticas a desarrollar en caso de ganar el cargo por el que se contienda, siempre apegadas a actos que estén involucrados con alentar la democracia, y por el contrario no se podrán realizar actos en los que a través de dádivas se coaccione el sufragio de la ciudadanía.

El Reglamento de Fiscalización, en su artículo 199, numeral 4 establece que son considerados como gastos de campaña los siguientes:

“(…)

Reglamento de Fiscalización

Artículo 199. *De los conceptos de campaña y acto de campaña*

(…)

4. *Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:*

a) *Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.*

b) *Gastos operativos de la campaña: comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.*

c) *Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.*

d) *Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.*

e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados en inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de Internet, así como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como finalidad promover la campaña de un partido político o candidato.

f) Los estudios, sondeos y encuestas que den a conocer, durante la campaña, preferencias electorales contratados por los partidos, candidatos o candidatos independientes o que les hayan sido aportados, mismos que deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de Instituciones y, en su caso, a los criterios que emita el Instituto en esta materia.

g) Gastos de jornada electoral comprenden: las aportaciones y los pagos en dinero y en especie que realicen los partidos, candidatos y candidatos independientes a sus representantes de casilla y generales; así como las encuestas de salida o conteos rápidos en términos del artículo 216 bis.

(...)"

Lo anterior en concatenación con la Tesis LXIII/2015 aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, misma que se transcribe a continuación:

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de

determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

Quinta Época:

En síntesis, todos los actos contrarios a la difusión de la imagen publicitaria de una candidatura, a través de un mensaje o propaganda de carácter electoral, ya sea por difusión o producción de este deben de catalogarse como un gasto no vinculado a la obtención del voto, razón por la cual el gasto por servicio de sanitización es catalogado de esta manera.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos acreditó la existencia de la entrega del servicio de sanitización en la vía pública y en la iglesia de San Juan Bautista, como presión al electorado para obtener el voto, por parte del Partido Encuentro Social, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla Morelos, el C. José de Jesús Pedroza Bautista.
- Que el gasto por los servicios de sanitización no fue reportado en la contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización de la campaña incoada.
- Que los servicios de sanitización *per se* no tienen ningún vínculo con la obtención del voto, pues no se encuentran estrechamente relacionados con la difusión de su imagen pública como contendiente de la campaña electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

- Que el servicio fue brindado por una agrupación que forma parte del partido político incoado, según la respuesta brindada por su representante propietario, por lo que se considera que el servicio fue brindado por el propio ente político incoado.
- Que al haber sido un gasto realizado por el partido político debió ser reportado, aunado a que no guarda relación con la obtención del voto, por lo que se configura el ilícito sancionable consistente en un egreso no reportado y no vinculado.

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos, no cumplió con la normatividad electoral respecto de la omisión de reportar el gasto y de realizar gastos que se encuentran relacionados con la obtención del voto por concepto de servicios de sanitización, incumpliendo con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso n); y, 76, numeral 3, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, se declara **fundado**, el presente apartado del procedimiento sancionador administrativo de queja en materia de fiscalización.

Determinación del monto involucrado

Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los términos siguientes:

- a. *Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.*
- b. *Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.*
- c. *Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.*
- d. *Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.*

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie por *servicio de sanitización en vía pública*, tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades del tipo *gastos no vinculados con la obtención del voto*.

En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece que *de manera única* para la valuación del **gasto no reportado y no vinculado con la obtención del voto**, la Unidad Técnica deberá utilizar el **valor más alto** de la matriz de precios.

En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no reportados por el sujeto obligado, se han sostenido criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encaminados a establecer que el costo valor de dichos bienes y servicio, se podrá obtener de la información de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores.

Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que por sí solo resulta insuficiente para determinar un valor o costo, toda vez que es necesario allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo razonable atendiendo a la **zona geográfica o económica** del bien o servicio prestado al partido político o candidato en particular:

Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros la matriz de precios más altos de los conceptos de mérito, obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se señala:

ID MATRIZ DE PRECIOS	CONCEPTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL A CUANTIFICAR
19911	Servicio de Sanitización	2	Sanitización en la vía pública	\$986.00	\$1,972.00

Es así, que por lo argumentos previamente expuestos nos arroja como resultado por concepto de monto involucrado, el ascendente a **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que será elemento central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente.

2.6 Individualización de las sanciones.

A. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de conformidad en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos; y, 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de reportar los egresos por concepto de gorras y renta de sillas, así como por la omisión de erogar recursos que estén estrechamente vinculados con la obtención del voto, por parte del Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Morelos.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los

sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación **SUP-RAP-153/2016** y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes

de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUPRAP018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al Partido Encuentro Social Morelos, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar egresos, y de no erogar recursos que se encuentren vinculados con la obtención del voto, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

B. Capacidad económica

Debe considerarse que el **Partido Encuentro Social Morelos**, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que se le imponen, pues recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/023/2022, emitido por Consejo General del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil veintidós, por el que se establecen las cifras del financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos en el año 2022.

Asignándosele como financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio 2022, los siguientes montos:

Partido	Financiamiento público para actividades ordinarias 2022
Partido Encuentro Social Morelos	\$4,685,332.77

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, es importante mencionar que el Partido Encuentro Social Morelos cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de septiembre de 2022	Montos por saldar
1	Partido Encuentro Social Morelos	INE/CG1366/2021	\$2,508,102.62	\$814,867.38	\$1,693,235.24
Nota: los saldos que se muestran solamente reflejan movimientos al mes de septiembre de 2022.					

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el **Partido Encuentro Social Morelos** tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

C. Individualización de la sanción por el gasto no reportado.

Toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta

- d)** La trascendencia de las normas transgredidas
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el apartado denominado “**B. Capacidad económica**” de la presente resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado **conducta infractora** localizado en el siguiente inciso, la falta corresponde a la **omisión** de reportar gastos por concepto de gorras y renta de sillas derivado de actos anticipados de campaña, durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de campaña el egreso por concepto de gorras y renta de sillas relativo a lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicha irregularidad se actualizó en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose durante la sustanciación del presente procedimiento oficioso.

¹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se

2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos³ y 127 del Reglamento de Fiscalización⁴.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que

³ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente (...)

⁴ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta de resultado** que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁵

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Tomando en cuenta los elementos analizados en el apartado **B. Capacidad económica**, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

⁵ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,691.30 (dos mil seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$2,691.30 (dos mil seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$2,691.30 (dos mil seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Encuentro Social Morelos**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,691.30 (dos mil seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

D. Individualización de la sanción por el egreso no reportado y no vinculado con la obtención del voto.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; y, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta
- d) La trascendencia de las normas transgredidas
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando además que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el apartado denominado “**B. Capacidad económica**” de la presente resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad de mérito, por la entrega del servicio de sanitización, la falta corresponde a la **omisión**⁶ de cumplir la normatividad al realizar erogaciones que no reportó y que no encuentran vinculación con la obtención del voto, atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; y, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización.

⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron

El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la irregularidad objeto de estudio, misma que vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; y, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicha irregularidad se actualizó en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose durante la sustanciación del presente procedimiento oficioso.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por no vincular erogaciones con las actividades de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos de los partidos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en

los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por no vincular erogaciones con las actividades de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos de los partidos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente⁷:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.

⁷ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente

obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; y, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Asimismo, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales aplicables.

Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las actividades siguientes:

- Actividades ordinarias permanentes,
- Gastos de campaña, y
- Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:

- Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,
- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma legislación electoral⁸, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.

Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden

⁸ Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53d e la Ley General de Partidos Políticos, señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

Expuesto lo anterior es de advertir que en la conclusión en análisis el sujeto obligado, vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos⁹.

Estas normas prescriben que **los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente** para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar

⁹ *“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:(...) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”*

“Artículo 76. 3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales;”

y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalados por la ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado erogaciones que no encuentran vinculación con la obtención del voto y el periodo de campaña, por sí misma constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos.

Así, aún y cuando el sujeto obligado dio respuesta a los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, esta no resultó idónea para justificar fehacientemente la vinculación a la obtención del voto, toda vez que estas no se encuentran relacionadas directamente con las actividades que constitucional y legalmente tienen encomendadas los institutos políticos, aunado a que no reportó el gasto en consecuencia el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; y, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

Por lo tanto, en el caso concreto, la irregularidad imputable al sujeto infractor se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del principio de legalidad, es decir, la falta se actualiza al destinar recursos que no están vinculados con la obtención del voto, lo que constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a los permitidos por la norma.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado de la legalidad.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.¹⁰

Debido a los elementos expuestos en el apartado **B. Capacidad económica**, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

¹⁰ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$1,972.00 (mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$3,944.00 (tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Encuentro Social Morelos**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,944.00 (tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2.7 Rebase del tope de gastos de campaña

Una vez determinado el monto al que asciende las irregularidades de la especie *egreso no reportado y gasto no vinculado con la obtención del voto*, la cantidad involucrada correlativa, se advierte:

Candidata	Cargo	Postulada por el partido	Monto susceptible de sumatoria
José de Jesús Pedroza Bautista	Presidencia Municipal de Jojutla	Partido Encuentro Social Morelos	\$4,663.30

Asimismo, se tiene acreditado en el presente expediente, lo siguiente:

Candidato	Gastos reportados Dictaminados	Gastos no reportados Dictaminados	Suma	Gastos a acumular en la presente Resolución	Total de gastos	Tope de gastos de campaña	Monto diferencia	Porcentaje diferencia
	A	B	C=A+B	E	F=D+E	G	H=G-F	I=H/G*100
José de Jesús Pedroza Bautista	\$60,089.76	\$0.00	\$60,089.76	\$4,663.30	\$64,753.06	\$864,317.44	\$799,564.38	92.50%

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

De lo anterior se desprende que la diferencia entre el total de gastos atribuibles a la candidatura y el tope de gastos de campaña asciende a 92.50%. Por tanto, no se actualiza la figura de rebase de tope de gastos de campaña.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, **por cuanto hace al gasto por el inmueble utilizado como casa de campaña**, en los términos de los **Considerandos 2.4, Apartado B**, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, **por cuanto hace a las gorras con propaganda electoral y la renta de sillas utilizadas en los eventos**, en los términos de los **Considerandos 2.4, Apartado B** de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone al **Partido Encuentro Social Morelos** por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **2.6, Apartado C**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto **Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes**, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,691.30 (dos mil seiscientos noventa y un pesos 30/100 M.N.)**

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

CUARTO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Encuentro Social Morelos respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla, el C. José de Jesús Pedroza Bautista, postulado por el, en los términos de los **Considerandos 2.5, Apartado B** de la presente Resolución.

QUINTO. Se impone al **Partido Encuentro Social Morelos** por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **2.6, Apartado D**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$3,944.00 (tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).**

SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización actualizar el anexo del Dictamen por cuanto hace al total de gastos de campaña del C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, postulado por el Partido Encuentro Social Morelos, en términos del Considerando **2.7**, de la presente Resolución.

SÉPTIMO. Notifíquese al C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos, y al Partido Encuentro Social Morelos.

OCTAVO. Hágase del conocimiento al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios de campaña, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de gasto no reportado con el 100% del monto involucrado, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**